

AI 066 de 2023
Proceso: Verbal
Demandantes: Héctor Alonso Sánchez Escobar y otros
Demandada: Expreso Girardota S.A. y otros
Radicado: 05308 31 03 001 2020 00017 01
Asunto: Repone auto que declaró desierto recurso de apelación

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, ocho (08) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Se encuentra la Sala Unitaria en oportunidad de resolver lo concerniente al recurso de reposición, adecuado de esa forma por la Sala Dual de esta Corporación, contra el auto del pasado 10 de julio de 2023 por medio del cual se declaró desierto el recurso de apelación por falta de sustentación en segunda instancia.

I. Fundamentos del recurso de reposición

1. El recurrente plantea como argumento central de su repulsa que ante juez de primera instancia explicó las razones fácticas y jurídicas de su enfermedad, de este modo alude a que *“...teniendo en cuenta que la sustentación hecha ante el juez de primera instancia había sido lo suficientemente clara, es que se decide ratificarse durante ese término de lo ya dicho, ello basado en el principio de economía procesal, pues no tiene ningún sentido enviar por escrito una transcripción de lo que se dijo de manera verbal que ya reposa en el expediente, de ser así lo que se genera es un reproceso y/o congestión para la sala al tener no solo que escuchar la apelación sino volver a leer lo mismo al momento de hacer el respectivo estudio del expediente...”*.

Que se *“...se estaría vulnerando el derecho de defensa y debido proceso, insisto, teniendo en cuenta que la apelación fue sustentada en debida forma ante la primera instancia...”*.

2. Bien, ha de advertir esta Sala unitaria del Tribunal que, de conformidad con el artículo 318 del C. G. del P., el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, **contra los del Magistrado sustanciador** no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen, salvo disposición en contrario. Así las cosas,

II. Para resolver se considera

1. La providencia motivo de disenso habrá de revocarse por las razones que a continuación se ofrecen:

1.2. Si bien en el auto recurrido se dio estricta aplicación a la jurisprudencia en vigor proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Corporado que, en sede funcional de segunda instancia iusfundamental viene siendo reiterada y consecuente con el criterio conforme el cual, la exposición de los fundamentos de la alzada al interponer el recurso de apelación, no eximen de la sustentación ante el superior, incluso, contrario a lo sostenido en estos asuntos por la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema De Justicia en primera instancia constitucional, encuentra defecto procedimental absoluto al no declarar desierto el recurso o tenerlo por sustentado por anticipación (Entre otras, ver sentencias STL7201-2023; STL6483-2023; STL6271-2023; STL6179-2023; STL6213-2023; STL6040-2023).

1.3. Partiendo de este estado de cosas jurisprudencial, ha de advertirse que, en este caso, ocurre una situación particular que me conduce, a modo de aplicación del precedente vertical, a compartir las consideraciones vertidas en la sentencia **T-310-23** del pasado **15 de agosto de 2023**, proferida por Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, cuya Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro mediante <<AUTO 28-ABR-23 NOTIFICADO 15-MAY-23.pdf>> optó por revisar el expediente digital **T-9329281**, por medio del cual se presentaba la reseñada controversia, como objeto de revisión, historió los fallos proferidos en ambas instancias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia, anotó entonces que, en primera instancia la Corte Suprema De Justicia “...encontró que el tribunal incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, **dado que la accionante sustentó el recurso ante el a quo, razón por la cual exigirle la sustentación ante el ad quem, vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia...**”

Y, en sede de apelación detalló que “...El 14 de septiembre de 2022, la Sala de Casación Laboral **revocó la decisión de primera instancia** y, en su lugar, negó el amparo. Sostuvo que no se configuró un defecto por exceso ritual manifiesto pues,

de acuerdo con la jurisprudencia vigente, exigir la sustentación del recurso ante el ad quem tiene sustento legal y no desconoce los derechos fundamentales.¹

1.4. Bajo ese contexto, advirtió entonces la H. Corte Constitucional que “...El caso se seleccionó por los **criterios objetivos de necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y por asunto novedoso**...”, y, en efecto, dio un viraje a la postura que venía siendo reiterada por la Sala Laboral de la Corte en segunda instancia, para “...**CONFIRMAR** la decisión proferida el 12 de agosto de 2022 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que concedió parcialmente el amparo del derecho al debido proceso...”. Cumple entonces referir las razones por las cuales dicha decisión constituye un precedente en este caso y se hace posible aplicar las mismas consecuencias jurídicas de aquella determinación judicial.

2. Procedencia y obligatoriedad del precedente para este caso concreto.

A voces de la Corte Constitucional:

“...Por precedente se ha entendido, por regla general, aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso...la Corte ha diferenciado dos clases de precedentes teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia previa: el **horizontal** y el **vertical**. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial. **El segundo, se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional**. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.

De otra parte, el precedente además de ser criterio orientador resulta **obligatorio** para los funcionarios judiciales, por las razones que se indicaron de manera clara en la sentencia **T-830 de 2012** y que a continuación se transcriben:

¹ Archivo denominado “05. SENTENCIA 99119 (STL12574-2022).pdf”, del expediente digital T9329281.

“La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

La segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales. En palabras de la Corte Constitucional:

“La fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”

La tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más razonable que existe hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina ha establecido como precedente: “tratar las decisiones previas como **enunciados autoritativos** del derecho que funcionan como **buenas razones para decisiones subsecuentes**” y “exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones

previas, sobre todo las de las altas cortes, como **una razón vinculante**” (énfasis de la Sala).”

De conformidad con las razones expuestas, para la jurisprudencia de esta Corporación el desconocimiento, sin debida justificación, del precedente judicial configura un **defecto sustantivo**, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –**sea este precedente horizontal o vertical**-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.²

2.1. Para aplicar el precedente, entonces, el juez debe argumentar por qué los hechos guardan una analogía estrecha, debido a que la *ratio decidendi* de una sentencia está compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un **supuesto de hecho** y una **consecuencia jurídica**. El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es aplicable la sub-regla identificada por el juez, de ahí que, cuando los casos son similares **deben recibir la misma consecuencia jurídica**. Así se hace realidad el principio de igualdad que obliga a aplicar la misma regla a quienes estén en la misma situación de hecho.

Así mismo, debe identificarse el principio o la norma que -como dice el DR. LOPEZ MEDINA- tiene conexión analógica, axiológica, metafórica o especulativa con los hechos concretos presentados y argumentar porqué ello es así.

2.2. Surge entonces el interrogante si ¿la sentencia T-310-2023 es precedente en este caso concreto para esta Sala Unitaria? Para responder este cuestionamiento, veamos la tesis que sostuvo la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional en el expediente T-9.329.281, para señalar que se **vulneró el debido proceso** de la parte recurrente, al exigirle la sustentación de la impugnación, en aquellos eventos en que se cumplió de forma antelada con la sustentación ante el juez de primera instancia.

2.3. Al respecto indicó entonces la Corte Constitucional:

“...si bien la carga de sustentación ante el ad quem resulta necesaria en un modelo de oralidad, en los términos expuestos por la jurisprudencia constitucional, dado que

² C. Constitucional T 360-2014

la audiencia de sustentación es la oportunidad procesal dispuesta para que la contraparte y el fallador de segundo grado conozcan el desarrollo de los reparos frente al fallo de primer grado, con la expedición del Decreto 806 de 2020, esta carga se flexibilizó.

Esto, porque, en primer lugar, no se prevé una audiencia de sustentación para que el juez y la contraparte conozcan el desarrollo de los motivos de inconformidad del recurrente frente al fallo. En segundo lugar, porque el recurso de apelación presentado ante el juez de primera instancia, cuando despliega razonablemente los argumentos que sustentan la apelación, permite al juez de segundo grado, en el análisis de admisión, determinar si contiene o no los elementos necesarios para que se entienda sustentado, pues en el modelo del Decreto 806 de 2020 estos reparos se presentan por escrito³. Es claro que ese instrumento permite velar por los derechos de contradicción, doble instancia y debido proceso de las partes...”

Seguidamente la Corte indicó que los requisitos de la sustentación se tramitaron y cumplieron bajo los preceptos del Decreto 806 de 2020 y que *El archivo da cuenta de que en el correo⁴ mediante el cual el juzgado remitió el link del expediente al tribunal, el 14 de marzo de 2022, se observa el documento contentivo del recurso de apelación en el cuaderno 1B, archivo denominado «034Apelación Sentencia», en 10 folios.*

2.4. Pasó a estudiar el contenido de ese escrito de apelación para advertir que:

“...El tribunal aplicó la regla de sustentación del recurso ante el superior de manera excesivamente formal, pues exigió una nueva sustentación por escrito del recurso que, efectivamente, ya estaba sustentado y que hacía parte del expediente que se le remitió. Para la Sala las razones contenidas en el escrito de apelación son claras y suficientes de cara a satisfacer una sustentación del recurso, de acuerdo con la exigencia del artículo 14 del Decreto 806 de 2020. En efecto, no se trata simplemente de los reparos contra la sentencia, sino de verdaderas y suficientes razones que tienen el propósito de discutir los fundamentos de la sentencia de

³ Las consideraciones del Decreto 806 de 2020, plantean que las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular «la segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar (...) sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentación del recurso, y por el contrario la sustentación, su traslado y sentencia se hará a través de documentos aportados por medios electrónicos»

⁴ Archivo denominado “003procesoaldespachotribunal» del cuaderno 2 del archivo “T-9329281 OFICIO OPT-A-215-2023.pdf” contenido en el expediente digital T9329281

primera instancia. Así, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá tenía a su alcance las razones concretas, claras y suficientes de cara a admitir el recurso. De lo anterior, dan cuenta también las consideraciones del tribunal en la decisión que confirmó la declaratoria de desierto del recurso, pues se observa un apego excesivo a la norma, en el sentido de sostener que, aunque el recurso estuvo sustentado ante el a quo, el recurso debe ser declarado desierto ante la omisión en la sustentación

(...) Así las cosas, la Sala comparte los argumentos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como juez de tutela de primera instancia porque, en efecto, la parte accionante presentó de manera suficiente y anticipada las razones que se le podían exigir al apelante y que el tribunal conoció. A pesar de lo anterior, y por un apego excesivo a la norma procesal contenida en el artículo 14 del Decreto 806, resolvió declarar desierto el recurso.

En suma, aunque el tribunal notificó en debida forma el auto mediante el cual admitió la apelación y corrió traslado para que fuera sustentada, se advierte que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que, bajo un apego excesivo a lo formal declaró desierto el recurso de apelación, pues consideró que no se había sustentado el recurso, a pesar de que contaba con la manifestación suficiente de las inconformidades frente a la decisión de primera instancia, lo que evidentemente desconoció el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de COMCEL.

3. Hay que reiterar en este punto, que el fundamento principal de la providencia emitida por esta Sala Unitaria el pasado 10 de julio de 2023, fue la sentencia de tutela proferida por la Sala Laboral en sede de segunda instancia constitucional, autoridad que, con fundamento en la **SU-418 de 2019** advirtió de la vía de hecho en que incurrió la Sala Cuarta de Decisión Civil, en un asunto del cual fui ponente, al tener por sustentado el recurso de apelación desde la primera instancia, este razonamiento fue el punto arquimédico a la hora de declarar desierto el recurso de la sustentación en el presente asunto, no obstante, ha de verse que este fue de los temas examinados por la Corte Constitucional en sede de revisión para señalar “...Esta regla tiene como precedente la Sentencia SU-418 de 2019⁵, en la que la Corte interpretó que el artículo 327 del CGP contiene un doble deber de fundamentación del recurso de apelación, pues los reparos presentados ante el a

⁵ Corte Constitucional. Luis Guillermo Guerrero.

quo, deben ser desarrollados ante ad quem, para efecto de lo cual el legislador previó la realización de una audiencia. Sobre esta audiencia, la Corte precisó que «tiene por objeto permitir que la parte apelante sustente los motivos de su inconformidad, a partir de lo cual podrán surtirse las alegaciones de la contraparte y proferirse la decisión», sustentación sin la cual, «[l]a diligencia carece de objeto y el superior no podría pronunciarse.» En ese entendido, la Sala estimó que exigir la sustentación en audiencia, no configura un defecto procedimental absoluto, en la medida en que existe una obligación clara y expresa que estableció el Legislador y que es razonable.

Estos casos son diferentes al que estudia la Sala, pues la discusión giraba en torno a la aplicación de las reglas en materia del recurso de apelación contenidas en el Código General del Proceso, pues los recursos en todos los casos fueron interpuestos antes de la entrada en vigencia del Decreto 806 de 2020, mientras que en el presente asunto se trata de un recurso que, como se explicó, fue interpuesto en vigencia del Decreto 806 de 2020, lo que diferencia los referentes normativos y el problema jurídico considerado en ambos casos...». Es lo que ocurre en este particular, donde el recurso de apelación fue interpuesto el 03 de febrero de 2023, es decir, bajo la vigencia de la ley 2213 de 2022 (por medio de la cual se establece la **vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020**)

3.1. Así las cosas, la respuesta que entregó la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional fue la irrupción en un apego excesivo a la formalidad procesal que, por supuesto, se comparte en esta decisión en su integridad, por cuanto se reconocen los principios que regulan la “apelación de sentencias en materia civil” sobre “...el desconocimiento de la cláusula de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal (art. 228 C.P.), que es el fundamento que sustenta el defecto por exceso ritual manifiesto, tiene como consecuencia la imposibilidad material de: (i) acceder efectivamente a la administración de justicia; (ii) permitir la discusión del fallo de primera instancia por un juez de superior jerarquía y (iii) limitó la deliberación sobre la controversia...”.

3.2. Sin que haya razones jurídicas para apartarse de esa determinación que se tomó en el seno del trámite de revisión constitucional, en la que pudo deducirse que, el recurrente, en su impugnación **en primera instancia**, exteriorizó con claridad los motivos de su inconformidad, como en efecto ocurre en este caso, donde el recurrente abarcó los puntos cardinales de su

disenso, a tal punto, que es fácil contrastarlos con los argumentos esbozados por el dispensador de justicia, es por eso que debo ceñirme al precedente vertical, porque de esa manera se hace realidad el principio de igualdad que obliga a aplicar la misma regla a quienes estén en la misma situación de hecho.

3.3. Colofón de lo anterior, es que esta Sala Unitaria del Tribunal ha de volver sobre sus pasos, abandonando el criterio plasmado en la providencia motivo del recurso de reposición, para aceptar que para la hora de ahora, tal como lo dijera la Corte Constitucional que “...aunque el tribunal no incurrió en un defecto procedimental absoluto, pues se ciñó al procedimiento previsto, como se explicó, **sí incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto...**” tornándose entonces en un punto capaz de modificar la providencia recurrida.

Por consiguiente, se repondrá la determinación de declarar desierto el recurso de apelación, amén que dicho acto procesal ya se había cumplido de forma anticipada ante el *a quo*.

De esta manera y por las razones expuestas, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, Sala Unitaria Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

REPONER el auto calendado el 10 de julio de 2023, mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación, para en su lugar, tenerlo por sustentado desde la primera instancia, ello, de conformidad con las consideraciones en que está sustentada la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



JULIAN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado